

Globethics Repository



Perú [Peru]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Lama, Abraham
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-14 00:03:02
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220956

Perú: Difícil sendero electoral

Lama, Abraham

Abraham Lama: Periodista peruano, especializado en análisis político. Director de la corresponsalía en Lima de la agencia Interpress Service-Tercer Mundo, cargo que ha servido durante 20 años.

Sobre el territorio peruano se superponen cuatro países: el país oficial, el insurgente, el militar y el que corresponde al narcotráfico, que se relacionan entre sí en términos de fricción o colisión, pero también con inesperados contactos de cooperación.

El país oficial es civil y democrático, con una autoridad, la del partido socialdemócrata APRA, en crisis interna, y cuya administración está afectada por grave debacle económica y financiera.

El segundo país, sumergida e insurgente, corresponde a los propósitos revolucionarios del partido maoísta en armas, "Sendero Luminoso", que no tiene ningún "territorio liberado" en condiciones de ser defendido, pero se expande y cumple, hasta ahora, sus metas.

El país militar, que existe desde el comienzo de la república independiente, cuando no ejerce directamente el gobierno por virtud de un golpe, se mantiene atento a las posibilidades y los pretextos para apropiarse del poder. La virtual guerra civil ahora existente, y las dificultades del gobierno civil para aplicar una drástica política de reajuste, parecen abrirle camino hacia el Palacio Presidencial.

El cuarto país, que corresponde al narcotráfico, tiene una economía que se calcula en 3.000 millones de dólares al año y sus tropas mercenarias dominan algunos enclaves en la selva, y en el resto del territorio ejerce autoridad a través de la corrupción y el terror. Compra la complicidad de policías y mandos militares, financia a los guerrilleros y sus dólares son adquiridos desembolzadamente por el Banco Central, lo que explica por qué aún no se desplomó totalmente la economía oficial.

La coyuntura democrática

En el país oficial, los tres grandes sectores políticos: el gobernante partido aprista, la derecha y la izquierda de vocación parlamentaria, se preparan para el rito demo-

crático que se consuma - cuando los militares no disponen otra cosa - cada cinco años: la renovación electoral del poder.

La derecha se muestra más adelantada en los aprestos para la lucha electoral y ya definió a su candidato, el escritor Mario Vargas Llosa, y por ahora trata de sacar ventaja a sus adversarios, dejando para más adelante la aburrida cuestión del programa y la espinosa distribución de las cuotas de poder entre los partidos que integran el Frente Democrático, FREDEMO, cuya única definición es, por ahora, su carácter antiaprista y anticomunista.

En los comicios de 1985, los dos partidos conservadores que presentaron candidatos presidenciales, Acción Popular (AP), entonces en el gobierno, y el Partido Popular Cristiano (PPC), sólo consiguieron en conjunto un magro 15 por ciento en los votos.

La proximidad electoral, la crisis del partido gobernante y el hallazgo de un rostro nuevo, Vargas Llosa, han despertado a los sectores conservadores de su letargo y ahora se muestran reanimados.

"En Perú las masas electorales son emocionales y se comportan en forma pendular. Todos los gobiernos se desgastan y, después de un régimen de izquierda, sigue uno de derecha. Ahora le toca a la derecha", opina con indudable esperanza, el senador y ex-ministro de AP, Gastón Acurio.

Pero la teoría del péndulo permite otra interpretación: quizás el péndulo no completó su movimiento hacia la izquierda.

Por lo menos así lo permiten suponer las encuestas de opinión efectuadas por institutos independientes, insospechables de simpatías por el marxista Alfonso Barrantes Langan, ex-alcalde de Lima, a quien le asignan el 34 por ciento de los votos potenciales, en este momento.

Es claro que Barrantes es resistido por los líderes más radicales del frente Izquierda Unida (IU), pero las masas lo siguen apreciando como el "candidato natural de la izquierda", a despecho de la opinión de los líderes de los partidos que conforman el frente. La cuestión de su candidatura se resolverá en el Congreso de IU, en octubre próximo.

La derecha considera que podrá remontar el segundo lugar que le asignan las encuestas al haber definido a Vargas Llosa como candidato (26 por ciento) mediante una hábil y poderosa campaña electoral.

La estrategia de Vargas Llosa se basa en presentar al APRA y a la Izquierda Unida como "la misma cosa" y acusa al presidente Alan García de haber puesto en práctica el programa político de la IU. Su mayor dificultad consistirá en conseguir votos fuera de Lima y de algunas otras ciudades importantes.

La propuesta de Vargas Llosa es atractiva para la clase media y convincente para los sectores empresariales: el APRA y la Izquierda Unida son movimientos pro-estatizantes, sus programas maniatan burocráticamente las iniciativas privadas y la solución a la actual crisis es reducir el rol del Estado y garantizar la más amplia libertad política y económica.

Obviamente, la bandera de la "libertad", lema central del partido de Vargas Llosa, implica cumplir el recetario económico del Fondo Monetario Internacional: eliminación de subsidios, cambio libre, contracción del gasto público, reducción de la burocracia, etc.

En medio de una crisis económica cada vez más cruel, será difícil a los publicistas que manejen la campaña de Vargas Llosa convencer con estos planteamientos a los electores de los sectores populares y de las zonas deprimidas, que reclaman mayores subsidios y apoyo presupuestal.

Problemas para García

En el partido gobernante, el APRA, la más extendida y mejor organizada institución política civil, con un tradicional 33 por ciento del electorado (salvo en 1985, cuando el carisma de Alan García elevó la votación aprista al 53 por ciento de los votos válidos), los pleitos internos, cada vez más evidentes y enconados, parecen quitarle claridad para enfrentar a sus competidores de izquierda y derecha.

García, un abogado joven e imaginativo, remontó en sus primeros dieciocho meses de gobierno su 53 por ciento de respaldo electoral a casi 80 por ciento, gracias al auge momentáneo de su atrevida política económica.

Al asumir el poder sostuvo que las recetas ortodoxas y liberales del FMI, en lugar de frenar la inflación, la estimulaban al disminuir el consumo, originando resultados recesivos.

Decidió postergar el pago a sus acreedores externos, con excepción de las instituciones internacionales (cuyo crédito cuidó siempre) para aplicar el dinero liberado por esta decisión en inversiones para el desarrollo.

Esa fue una batalla que ganó el osado primer mandatario peruano, aunque se quedó solo por momentos, y se impuso a la banca internacional, que comenzó a entender su responsabilidad en la generación alegre de una deuda imposible de pagar en los términos en que fue pactada.

El empleo de esos 3 mil millones de dólares dejados de pagar a los acreedores externos se convirtió en un extraordinario negocio para los empresarios peruanos, especialmente para los manufactureros y comerciantes, porque el alza de salarios, la disminución de la desocupación y los dólares subsidiados para la importación de bienes terminados e insumos aumentaron sus ventas.

Aparentemente, García supuso, con cierta ingenuidad, que los empresarios manufactureros reinvertirían sus ganancias, porque el control de cambios los obligaba a mantener sus capitales en el país.

Se equivocó. Los empresarios demostraron ser más astutos y desconfiados. Usaron sus ganancias para comprar en el mercado negro los 2 mil millones de dólares ofertados por el narcotráfico, y los sacaron fuera.

Cuando García descubrió que la banca privada nacional se había convertido en un circuito de evasión de los dólares adquiridos por el empresariado ya era tarde, las reservas de divisas en manos del Banco Central habían comenzado a descender peligrosamente por su política de subsidiar el dólar del cambio oficial.

Su reacción fue intentar estatizar a la banca privada, y los banqueros, amenazados, conmovieron a la clase media, que despertó de su sopor político y descubrió a Vargas Llosa. Prisionero de su voluntad de popularidad, García se resiste a suprimir los subsidios, para no retornar a las recetas del FMI, las cuales abominó públicamente.

La inflación retorna, con mayor gravedad que la encontrada cuando asumió su mandato, propiciada ahora por el consumo estimulado por los subsidios y el control de precios. Carente de divisas, el Banco Central no puede atender los requerimientos industriales para importar insumos y repuestos, y la recesión retorna tai-madamente.

¿Reforma constitucional?

Mientras esto ocurre en el frente económico, en el área política, la impopularidad creciente se complica con la disputa en el interior del partido gobernante por la sucesión presidencial.

Los líderes históricos del APRA, los ancianos senadores y la cúpula de la maquinaria del partido, apoyan mayoritariamente las aspiraciones del ex-primer ministro y ministro de Economía, Luis Alva Castro, cuyo nombre asocian con los primeros 18 meses de triunfalismo económico del régimen.

El presidente García no ve con simpatía la designación de Alva Castro como candidato y la bloquea insistentemente, causando malestar en su partido, pero hasta ahora no deja que se conozca a quien preferiría como candidato presidencial del APRA.

Algunos "alanistas" sostienen que ni Alva Castro ni cualquier otro líder que no sea Alan García podrá ganar para el APRA las elecciones de 1990. Suponen que sólo el verbo, el carisma y la Creatividad osada del joven presidente permitiría remontar una impopularidad que por momentos parece abismal. Piensan en su reelección. Pero la Constitución peruana no admite la reelección inmediata y el tiempo se acorta para utilizar la mayoría parlamentaria en una Reforma Constitucional, que se hace más difícil todavía, si un sector del partido se opone a dicha reforma.

El debate interno en el APRA pasa en este momento por la lucha por controlar la maquinaria del partido, probablemente para manejar, o impedir, la consulta a las bases respecto a la reforma constitucional.

En el Congreso aprista, en agosto de 1988, alvistas y analistas compitieron por la Secretaría General y el Comité Ejecutivo Nacional; sólo después de esa definición se enfrentan respecto a la designación del candidato presidencial para los comicios de 1990.

Mientras el país oficial se entretiene en las escaramuzas de la lucha por la primacía de uno u otro candidato, Sendero Luminoso se propone impedir las elecciones provocando un golpe militar.

Busca el golpe con el programado desborde violento de los mítines y protestas sindicales, así como mediante una política de desestabilización rural basada en el asesinato de las autoridades civiles y los funcionarios del Estado en las áreas sin protección policial.

Su meta es despejar el escenario político, para que al final queden, frente a frente, dos únicos protagonistas: un gobierno militar y las fuerzas insurreccionales.

Los líderes senderistas están seguros de que una dictadura militar derechista volcará hacia ellos el formidable 30 por ciento de la población que ahora vota por los partidos marxistas que componen Izquierda Unida.

Sendero ataca a los dirigentes de IU, calificándolos como oportunistas y cómplices del gobierno, en tanto que los líderes de IU sostienen que Sendero desarrolla una política fanática, violentista y provocadora, "enemiga del ascenso pacífico al poder de las clases populares".

Las estadísticas oficiales indican que unas 190 autoridades civiles (en su mayor parte alcaldes, concejales y gobernadores de aldeas) han sido victimadas por Sendero por no renunciar a sus cargos, pese a las amenazas recibidas.

En su mayoría estas víctimas eran apristas, pero alrededor de una veintena de los alcaldes y regidores asesinados eran militantes de IU.

Según las mismas cifras oficiales, más de 9 mil personas han sido muertas, como consecuencia de la guerra revolucionaria. Hasta fines de mayo de 1988, 526 de esos muertos correspondían a oficiales, soldados o agentes de policía. Los demás eran campesinos, aliados o enemigos de Sendero Luminoso.

Existe otra organización insurgente, que actúa desde 1982, que también se declara marxista, pero difiere en táctica y recursos: el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), que no acepta la hegemonía exigida por Sendero. Columnas de ambas organizaciones se han enfrentado, en por lo menos dos oportunidades, con un saldo de más de 60 muertos.

El MRTA cultiva buenas relaciones con IU, aunque discrepa con su línea parlamentaria y aconseja a los líderes izquierdistas "pasar a la clandestinidad o subir al monte, porque el golpe es inevitable".

Por lo menos un importante partido del frente IU parece haber sido convencido por esta prédica: el Partido Unificado Mariateguista, del senador Javier Diez Canseco, y en el último Congreso de esa organización (realizado en julio), se impuso una línea que prioriza la creación de un aparato militar de "autodefensa".

Se supone que esa decisión provocará la fractura del PUM y favorecerá las posibilidades de Barrantes de conseguir en IU la designación de su candidatura, porque la línea del PUM ya no es compatible con las aspiraciones electorales de IU, y lo único que podría buscar es frustrar las posibilidades de triunfo.

La propuesta bélica y el "indigenismo" de Sendero

Al comienzo, en la década del 70, Sendero Luminoso no fue tomado en serio. En Lima, algunos de sus militantes actuaban de un modo pintoresco en los últimos años del gobierno del general Francisco Morales Bermúdez.

Hacían pintadas en algunas paredes, vivando a Mao o la "cuatrinka", o ahorcaban perros en los postes, con leyendas que vaticinaban parecida muerte para Teng Siao Ping.

Muchos de sus militantes y dirigentes, atraídos por la posibilidad de conseguir empleos en una universidad reabierto después de décadas, en Huamanga, a 650 kilómetros de Lima, en la sierra sur central, fueron a radicar allí; y se encontraron en el corazón del llamado trapecio andino de Perú.

El trapecio es la zona de mayor pobreza y atraso y gran parte de su población rural esta constituida por etnias que estuvieron sometidas a explotación y marginación desde los remotos tiempos del incario, soportaron al colonialismo español, fueron luego expoliadas por el feudalismo y la reforma agraria de Velasco les dio tierras muy pobres y altas, en las que no se puede sembrar.

A esa zona, llevados por un interés laboral y académico, llegaron, pues, los líderes del partido que hasta entonces se limitaba a condenar a la URSS, glorificar a Mao, odiar a Teng Siao Ping, en cuyo nombre ahorcaba perros en Lima.

En Huamanga los maoístas seguidores de Abimael Guzmán se dedicaron, entre 1970 y 1980, a estudiar los libros clásicos del líder chino y luchar por el control de los estamentos estudiantiles y académicos de la universidad.

En 1980, mientras los partidos en Lima se preparaban para ocupar el espacio político que dejaban los militares, que devolvieron ese año el poder a los civiles, los maoístas de Guzmán eran desplazados de la Universidad de Huamanga, porque estudiantes y catedráticos se cansaron de su violentismo fanático.

Irritados y dispuestos a castigar a la ciudad que les dio la espalda, los maoístas de Sendero Luminoso decidieron retirarse al campo y prepararse para una guerra en serio.

El modo como una propuesta política tan exótica logró enraizarse en la mentalidad indígena rural de la sierra sur central, es ahora objeto de estudio de antropólogos y sociólogos, porque las explicaciones oficiales, que sólo aluden a contagios ideológicos, confusión juvenil y demagogia mezclada con intimidación, resulta insuficiente para entender el fanático misticismo de los seguidores de Sendero.

Sobre esa base social étnica, con siglos de marginación histórica, el ex-estudiante de teología, Abimael Guzmán, desarrolló su partido armado y puso en práctica el esquema maoísta de "guerra popular prolongada, del campo a la ciudad".

A partir de 1982, Sendero comenzó a ser tomado en serio, cuando capturó durante dos horas la ciudad de Huamanga, capital del departamento de Ayacucho, con más de 100 mil habitantes, y en cuyo perímetro existía entonces un cuartel del ejército y tres de la policía.

Sendero Luminoso asaltó la cárcel de Huamanga y liberó a más de 300 presos políticos y comunes, la mayoría de los cuales engrosaron las filas insurgentes.

Durante 9 meses el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry quiso mantener el fenómeno Sendero Luminoso como una cuestión únicamente policial, resistiéndose a llamar al ejército por comprender que los militares pedirían un pago político.

Recién en enero de 1983 se hace cargo de la lucha contrainsurgente la fuerza armada, pero el gobierno civil y democrático tiene que aceptar la condición de hierro del

país castrense: en las zonas de emergencia no tienen jurisdicción las autoridades civiles, sino en la medida que lo admita el jefe militar de la plaza.

La autonomía concedida a los militares en las zonas de emergencia no ha significado la erradicación de la insurgencia, que si bien no puede defender ningún territorio cuando llegan las tropas, esta en condiciones de jaquear constantemente y trata ahora de abrir nuevos frentes, dos de los cuales intentan cercar a Lima por sus extremos serranos inmediatos del norte y del sur.

Los militares y la tentación del golpe

Más de la mitad de los 166 años de vida republicana de Perú han transcurrido bajo regímenes militares. Con negro humor, un semanario político tituló en primera página en 1962, después de un golpe militar derechista: "Volvió la normalidad".

Los militares peruanos están por encima de la jurisdicción de los tribunales civiles, tienen su propio fuero y los parlamentos no suelen resistir sus demandas presupuestales, reclamadas en nombre de la seguridad nacional.

En la coyuntura actual, hay dos factores que pueden empujarlos a tomar el poder: el desarrollo de la lucha contrainsurgente, y la extrema y recesiva crisis económica.

Los militares afirman que las limitaciones legales del país civil y constitucional no les permiten exterminar a los insurgentes y quieren que se extiendan a todo el país las facultades extraordinarias que los gobiernos de Belaúnde Terry y García les han concedido en cinco departamentos del interior, que representan el 20 por ciento del territorio.

También Lima, con seis millones (casi un tercio de la población total de Perú) está bajo el régimen en emergencia, pero las atribuciones que los militares asumen en la capital son más prudentes y dejan campo de acción a las jerarquías civiles, a través del Ministerio del Interior, a cargo de un militar, el contralmirante Juan Soria.

En los primeros días de julio, produjo un escándalo la revelación de una grabación del discurso del presidente Alan García en un Congreso de la Juventud de su partido, en el que criticaba la corrupción y la sensualidad burocrática de los miembros de su partido, y exhortaba a los jóvenes a comportarse con la mística de sus adversarios insurgentes.

Esta revelación fue aprovechada de inmediato por los medios periodísticos conservadores para azuzar a las fuerzas armadas en contra de Alan García.

Pocos días después, una publicación de Lima, que se edita en inglés y se distribuye sólo entre abonados, reveló que los militares estaban reclamando autonomía política total para enfrentar a la subversión y que el Parlamento no intervenga en la aprobación del presupuesto de las fuerzas armadas.

Los rumores de golpe menudearon más que de costumbre, y los más suspicaces observadores estimaron que esos rumores formaban parte de una maniobra de inteligencia para presionar en favor de la demanda castrense.

Sin embargo, otros analistas consideran que los militares no parecen dispuestos a tomar el poder en este momento, por las dimensiones e implicancias de la crisis económica y financiera. Sostienen que los militares preferirían que la impopularidad consiguiente de la política de ajuste contra la crisis sea asumida por el partido gobernante.

Por otro lado, algunos indicios sugieren que no todos los militares consideran que la solución es aplicar la receta liberal del FMI.

El general (r) Sinesio Jarama, quien fue ayudante del ex-canciller Edgardo Mercado Jarrín durante el gobierno militar reformista de Velasco Alvarado, dijo recientemente en un seminario sobre la deuda externa y las crisis económicas: "los civiles han demostrado no estar en condiciones de efectuar transformaciones estructurales, hasta que se lo propongan".

Lo significativo es que el general Jarama tuvo mando de tropa hasta hace seis meses y, por consiguiente, su pensamiento puede revelar criterios de por lo menos un sector del ejército.

Esto ha motivado una reflexión, quizás especulativa: los militares peruanos no han dado el golpe todavía porque no se han puesto de acuerdo sobre cómo encarar la crisis. Según esta hipótesis, un sector, cuyo núcleo radica en el espíritu conservador de la marina, considera que un modelo como el del general Pinochet sería eficaz para derrotar a la subversión y disciplinar al país civil detrás del modelo de ajuste ortodoxo.

Pero la otra tendencia castrense, supuestamente enraizada en el ejército, estima que las transformaciones iniciadas por Velasco Alvarado en 1968, revertidas parcialmente por el conservador período del ex-presidente Fernando Belaúnde Terry (1980-85) y que no han podido desarrollarse bajo la administración del socialdemócrata Alan García, necesitan otro gobierno de facto para ser profundizadas, con el propósito de evitar la revolución que promueve Sendero. Este posible desenlace intimida a los sectores empresariales, que necesitan un cambio de política económica, pero preferirían un gobierno constitucional en donde podrían dar batalla en defensa de sus intereses.

La izquierda no insurreccional cree que las posibilidades de un desenlace "tipo Pinochet" son más factibles que el resurgimiento del velasquismo. En todo caso, los partidos marxistas tampoco aceptarían el velasquismo, tal como lo rechazaron en la década del 70, porque lo eliminaría del juego político.

Salvo los militares, los únicos interesados en una dictadura castrense son los insurgentes. En este objetivo, son coincidentes con las tentaciones y fantasías de los generales.